



OPINIÓN

La cuestión del agua y los caciques

Por Xochitl Patricia Campos López

Desde la perspectiva de Jaime Castrejón Diez el poder de los cacicazgos en México no es una simple herencia del pasado, sino una estructura social y política radicalmente arraigada en la realidad nacional. Los caciques representan una forma de autoridad que, aunque no siempre formal, es profundamente efectiva en mantener el control sobre sus territorios y comunidades.

Los gobiernos estatales, consciente de que enfrentarse a estos líderes tradicionales implicaría un enorme costo social, prefieren mantener una relación de convivencia, aunque sea tensa y ambigua, en lugar de abrir una confrontación que pueda desatar un caos social de consecuencias impredecibles.

El problema del agua en México ha emergido como un detonante clave de esta rebeldía caciquil. La gestión y distribución del recurso hídrico, que en muchas regiones ha estado en manos de caciques o de intereses regionales que actúan en función de sus propios beneficios, ha generado un profundo malestar social.

La imposición de nuevas leyes o reformas, como las que promueve la Ley de Aguas Nacionales, se perciben no solo como una amenaza a los privilegios tradicionales, sino también como un intento de

desmantelar esas redes de poder que han sido la base del control social y económico en muchas comunidades.

Este escenario, en el que el Estado intenta modernizar y regularizar la gestión del agua, puede convertirse en un foco de resistencia caciquil que desafíe la autoridad del gobierno central. La historia muestra que esas resistencias no son fáciles de doblegar, pues los caciques, en su poder, representan una forma de sostener sus privilegios y, en muchos casos, su supervivencia misma.

La relación entre el poder caciquil y la autoridad estatal es, en esencia, un equilibrio de fuerzas donde el costo social de enfrentarse a estos líderes es considerado demasiado elevado por los gobiernos, que prefieren evitar un conflicto abierto que podría desestabilizar la gobernabilidad.

Para Morena, partido en el poder, esta situación representa un desafío potencialmente similar a episodios históricos como la expropiación de tierras en el cardenismo, que generó una fuerte resistencia y tensiones internas. La diferencia radica en que el conflicto por el agua, un recurso vital, puede escalar rápidamente y desencadenar una rebeldía que, si no se maneja con cautela y estrategia, podría poner en riesgo la estabilidad del propio gobierno.

La resistencia caciquil en materia de agua no solo es una disputa por un recurso, sino

un símbolo de la lucha por el control y la autonomía de las comunidades frente a las imposiciones estatales.

La situación en Puebla, donde el gobernador Alejandro Armenta ha solicitado el auxilio de las autoridades federales ante el desafío de un líder regional que cuestiona su estrategia para inhibir la manifestación de campesinos y disidentes, revela una dinámica compleja en la estructura del poder local.

Puebla es una entidad dominada completamente por caciques, el gobierno estatal siempre ha tenido que trabajar con ellos; pero no puede ponerlos en orden.

Esa incapacidad refleja las limitaciones de un Estado que, en su estructura social, todavía se sustenta en un equilibrio de poder basado en la convivencia con esas figuras tradicionales, en lugar de una ruptura definitiva con ellas.

Puebla, en ese sentido, se asemeja a estados como Michoacán, Guanajuato o Veracruz, donde el caciquismo evoluciona de las redes de poder informal a la delincuencia organizada en forma dinámica y se tejen poderes fácticos que desafían la autoridad formal del Estado. El mensaje de Alejandro Armenta al gobierno federal transmite el sentimiento de inseguridad nacional que vive el país.

Desde las ideas compartidas, especialmente en la perspectiva de la resistencia cultural y social que caracteriza a regiones con una historia de dominación de caciques y líderes tradicionales, se puede entender que la presencia de estas figuras no es simplemente un vestigio del pasado, sino un elemento central en la configuración del orden social. Los cacicazgos en México no son un fenómeno marginal, sino una fuerza radical que puede resquebrajar la autoridad del Estado si no se enfrentan con una política que reconozca su existencia y busque integrarlos en un orden legal y social que reduzca su influencia. La gestión del agua, en ese contexto, se convierte en un campo de batalla donde la resistencia caciquil puede consolidarse o ser desmantelada, pero siempre a un costo social que los gobiernos prefieren evitar.

La historia muestra que, en la lucha por el poder y la autoridad, los caciques seguirán siendo actores clave, y su resistencia, particularmente en temas como el agua, será un factor decisivo en la estabilidad política del corto plazo.



Foto Cuartoscuro